



La corrupción carcome al IMSS

La corrupción que carcome al IMSS no es un asunto menor ni un simple diferendo administrativo: es una amenaza directa a la salud y a la vida de millones de derechohabientes.

En momentos en que el Instituto Mexicano del Seguro Social enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia —mayor demanda de servicios, infraestructura insuficiente, presión financiera y el compromiso de elevar la calidad médica—, lo último que puede permitirse es que la opacidad y la colusión definan la asignación de contratos.

Bajo la dirección de Zoé Robledo, el IMSS ha insistido en un discurso de eficiencia, transparencia y combate a la corrupción. Sin embargo, los hechos documentados en distintas áreas del instituto revelan una realidad preocupante: licitaciones públicas diseñadas como traje a la medida para favorecer a empresas previamente acordadas; procesos en los que compiten supuestos rivales que en realidad comparten vínculos empresariales o políticos; y, peor aún, adjudicaciones directas otorgadas a proveedores que no cumplen con los estándares míni-

DESDE SAN LÁZARO

**Alejo
Sánchez Cano**

Opine usted:
opinion@elfinanciero.com.mx

mos de calidad médica.

No se trata de tecnicismos administrativos. Cuando una empresa sin experiencia acreditada gana un contrato para suministrar insumos hospitalarios, equipos de alta especialidad o servicios subrogados, el riesgo no es abstracto. Es el paciente que recibe un tratamiento deficiente, el equipo que falla en una cirugía o el medicamento que no cumple con la norma. En materia de salud pública, cada error tiene nombre y apellido.

La situación es particularmente grave en áreas sensibles como la Delegación Sur de la Ciudad de México y en unidades de alta especialidad como Cardiología, tan solo por citar algunos ejemplos.

Ahí se han documentado violaciones a principios claramente

establecidos en la Secretaría de Salud y sus disposiciones técnicas, incluyendo la Norma Oficial Mexicana “NOM” correspondiente a estándares de calidad y seguridad en la atención médica. Estas normas no son recomendaciones optativas: son lineamientos obligatorios cuyo incumplimiento puede traducirse en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.

Los documentos disponibles muestran patrones repetitivos: cambios de última hora en los criterios de evaluación, requisitos técnicos poco claros que solo ciertas empresas pueden cumplir y decisiones que descalifican propuestas fuertes por detalles pequeños, mientras se aceptan fallos importantes en las empresas favorecidas.

El resultado es un sistema capturado por intereses privados que operan con la complicidad —o al menos la omisión— de funcionarios encargados de salvaguardar el interés público.

Las consecuencias ya no pueden maquillarse. Existen casos en los que la deficiente calidad de insumos o servicios ha derivado en complicaciones médicas severas e incluso fallecimientos.

Cuando la corrupción incide en decisiones clínicas o en la provisión de materiales críticos, deja de ser un delito patrimonial para



prefiere ver o escuchar: 41% opta por noticias “vistas” y 23% por “escuchadas”, frente a 36% que elige “leídas”. TikTok ya es fuente primaria para 24% de los mexicanos y, para la Generación Z, el 44% pone a redes y video como su principal puerta a la actualidad. El nuevo idioma es vertical, corto y entendible en segundos, pero su consumo depende del humor algorítmico.

Prospera un sistema alternativo de informadores: YouTubers, TikTokers y podcasters que mezclan datos con entretenimiento, opinión y cercanía personal.

Para una parte del país son focos de desinformación; para muchos jóvenes son accesibles, humanos, “auténticos”. En su desconexión con las audiencias, muchos medios llegaron a TikTok como si fuera televisión recortada o columnas leídas en voz alta, sin entender que se premia autenticidad, ritmo, claridad, rostro y contexto.

En el campo político, algunos actores públicos sin estrategia (o sentido común) se vuelven medios de comunicación de sí mismos y son sorprendidos maltratando a un animal exótico, saliendo de una tienda de marca o revelando privilegios.

Las autoridades electorales enfrentan un problema estructural: la regulación de *influencers* en campañas sigue difusa, la transparencia del financiamiento

digital es incompleta y la asimetría tecnológica favorece a quien puede comprar segmentación, creatividad automatizada y amplificación artificial. Un pendiente en la inminente reforma electoral es crear condiciones viables para una gobernanza digital.

Cuando la confianza se fragmenta, el mayor riesgo para los medios tradicionales no es perder clics, sino perder identidad. Cuando todos persiguen las mismas tendencias, el contenido se homogeneiza justo cuando la IA puede producir textos aceptables a escala.

La respuesta no está en publicar más, sino en valer más: investigación original, reporteo de campo, análisis con consecuencias, crónica humana, especialización y servicio.

La IA puede sintetizar, pero no puede sustituir la legitimidad de haber estado ahí, ni la responsabilidad editorial de sostener una información con evidencia.

La demanda de información veraz, relevante y humana no desaparece, solo cambió de forma. A los medios les toca dejar de perseguir el algoritmo y empezar a construir comunidad como infraestructura democrática.

Lecturas sugeridas: “*Deconstruyendo los medios*” de Pepe Cerezo (Acopress) y Digital News Report 2025 (Reuters Institute).

Gracias, LGCH.